

Gaceta de Puerto-Rico.

SE PUBLICA

SE SUSCRIBE

TODOS LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS.



EN LA IMPRENTA DE ACOSTA, FORTALEZA - 21

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO.

Año 1881.

JUEVES 28 DE JULIO.

Número 90.

PARTE OFICIAL.

GOBIERNO GENERAL DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

SECRETARIA.

NEGOCIADO 2º

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 283 y con fecha 5 del mes próximo pasado, se comunica á este Gobierno General la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:— Pasado á informe de la Seccion de Ultramar del Consejo de Estado la consulta elevada por V. E. al Ministerio de mi cargo en carta oficial número 133 de 8 de Marzo último, relativa á si se pueden declarar apelables las disposiciones de los Alcaldes, corrigiendo infracciones de Policía cometidas por la prensa periódica, la referida Seccion ha emitido en 22 de Abril próximo pasado el siguiente dictámen:— Excmo. Sr.:— Con Real orden, comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. E. en 12 de Abril corriente, fué remitido á informe de esta Seccion el expediente de la Ley de Imprenta de Puerto-Rico para su informe, respecto á la consulta del Gobernador General, relativa á si se pueden declarar apelables las disposiciones de los Alcaldes, corrigiendo infracciones de Policía cometidas por la prensa periódica. En telégrama recibido en 3 de Febrero último el Gobernador General consultó á ese Ministerio si las correcciones impuestas por los Alcaldes con arreglo á la Ley de Imprenta, por infracciones de Policía, eran apelables ante el Gobierno General y las de este ante V. E., añadiendo que, conforme á la opinion del Consejo Contencioso-administrativo, habia declarado en la GACETA que no lo eran, y en otro telégrama de 4 del mismo mes, V. E. contestó que la declaracion hecha estaba de acuerdo con la Ley de Imprenta, pero que debia tenerse presente la práctica contraria seguida en la Península, para aplicarla si se creyere oportuno. Posteriormente, en carta oficial de 8 de Marzo último, el Gobernador General manifiesta que, no teniendo completa confianza en la discrecion con que algunos Alcaldes usan de la facultad que la Ley les concede para imponer multas por infracciones de Policía llevadas á cabo por la prensa, ántes de adoptar una resolucioin definitiva sobre si las providencias en que se impongan son apelables, se cree en el caso de hacer presente que por mas que considera conveniente la admision del recurso de apelacion contra las impuestas por los Alcaldes, no le parece lo mismo respecto del que se interponga contra las del Gobierno General, porque pudiendo asegurarse que ninguna de sus resoluciones llegaría á ser ejecutoria, esto menoscabaría el prestigio de su Autoridad; por todo lo cual ruega á V. E. le autorice para declarar apelables solo las providencias de los Alcaldes y no las del Gobierno General, ó que estas lo sean únicamente en los casos en que la correccion impuesta sea la máxima que permita la Ley. El Negociado correspondiente de ese Ministerio informa favorablemente la consulta del Gobernador General, si bien no concede importancia al particular referente á la cuantía de las multas, y la Sub-secretaría es de parecer que cualquiera que sea la cuantía de la multa impuesta por los Alcaldes, se puede apelar de ellas ante el Gobernador General y en último término al Ministerio de Ultramar. Al opinar el Consejo Contencioso-administrativo en el informe de que se habla en los relacionados antecedentes que eran ejecutorias y sin ulterior recurso las disposiciones adoptadas por las respectivas Autoridades para castigar las infracciones de Policía de la Ley de Imprenta, fundó su parecer en que, el silencio del legislador en este punto, contrastando con sus explícitas declaraciones en otros casos, como son los á que se refiere el artículo 73 y el párrafo 2º del 77, dá á entender que ha estimado conveniente que las providencias de que se trata sean ejecutorias; añadiendo que de no estimarse así habria que conceder el recurso contra las providencias del Gobierno General respecto de los infractores de la Ley en la Capital. En sentir de la Seccion no es concluyente el razonamiento del Consejo Contencioso-administrativo, porque refiriéndose los artículos 73 y 77 de la Ley de Imprenta á casos distintos de los

comprendidos en el artículo 11 de la misma Ley, esto es, haciendo relacion los primeros á la negativa de permisos para la publicacion de folletos, hojas sueltas y carteles y contrayéndose los segundos á las infracciones de Policía y sus penas, del silencio de la Ley en cuanto á si deben ó no admitirse apelaciones contra las providencias en que las multas se impongan, no puede inferirse que tan solo en los casos de los artículos 73 y párrafo 2º del 77 debe darse recurso de alzada contra lo dispuesto por las respectivas Autoridades. La Seccion entiende que no deben ser ejecutorias las providencias de los Alcaldes y del Gobernador General imponiendo multas á la prensa por infracciones de Policía, sino que contra las primeras debe darse recurso de alzada para ante el Gobierno General, y contra las segundas para ante el Ministerio de Ultramar, porque basada la Ley de Imprenta de Puerto-Rico, segun se consigna en su preámbulo, en la obra de asimilacion política y administrativa de la Isla de Puerto-Rico á la Península, y observándose en esta la práctica (conforme aparece del expediente), debe darse alzada contra las resoluciones de los Alcaldes para ante los Gobernadores de las provincias, y de las de estos, ya impongan penas por sí, ya decidan sobre las apelaciones elevadas contra los Alcaldes, para ante el Ministerio de la Gobernacion, natural es que se interpreten del mismo modo las disposiciones de la Ley de Imprenta de Puerto-Rico, si la obra de asimilacion ha de ser completa. Ni obsta, en contrario, que la Ley guarda silencio en cuanto á los recursos de que se trata, porque siendo por regla general revocables por sus Superiores Jerárquicos las resoluciones de los funcionarios de la administración, mientras en un precepto legal no se consigne su irrevocabilidad, no habia precision de que la Ley declarase expresamente la procedencia de aquellos, y en su silencio debe seguirse aquel principio general. Por último, afirmando el Gobernador General que no le inspira confianza la discrecion de los Alcaldes en la aplicacion de las multas á la prensa, la Seccion estima que la admision de apelaciones contra las providencias en que las impongan, evitará los peligros de la arbitrariedad y de la injusticia, y admitidas esas apelaciones, como expone el Consejo Contencioso-administrativo, debe seguirse por entero la práctica de la Península, haciendo extensivo el recurso á las providencias del Gobernador General, con tanto mas motivo cuanto que una y otra solucioin están en armonía con el espíritu liberal que informa el Decreto sobre indulto á la prensa de Puerto-Rico de 18 de Febrero último. En suma, la Seccion es de dictámen:— 1º Que contra las providencias de los Alcaldes en que se impongan multas por infracciones de Policía, comprendidas en la Ley de Imprenta de Puerto-Rico, debe darse recurso de alzada para ante el Gobernador General, así como tambien contra las que éste dicte, ya sean imponiendo multas por sí mismo, ya decidan sobre las apelaciones de las de los Alcaldes, procederá el recurso para ante el Ministerio de Ultramar.— 2º Que convendría advertir al mismo Gobernador General, que de la necesaria publicidad á la Real resolucioin que recaiga sobre el asunto en la GACETA y BOLETIN OFICIAL de aquella Isla. V. E. sin embargo con S. M. acordará lo mas acertado.— Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinstituto dictámen, de su Real orden lo traslado á V. E. para su cumplimiento.”

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 7 del actual, de su Superior orden se publica en la GACETA para general conocimiento.

Puerto-Rico, 26 de Julio de 1881.— El Secretario del Gobierno General, *Ricardo de Cubells*. [4161]

REAL AUDIENCIA DE PUERTO-RICO.

SECRETARIA DE GOBIERNO.

Relaciones de reos prófugos con causas pendientes en el primer semestre de 1881.

JUZGADO DE 1º INSTANCIA DE CATEDRAL.

ESCRIBANIA DE DON MANUEL J. CALDERON.

Juan Pedro y Hernandez, por heridas; no consta su identidad: en 1834.

Alejo de la Cruz, por hurto; no consta su identidad: en 1834.

Candelaria Oquendo, por heridas; en 1834.

José Carrion, por sospechas de asesinato; en 1835.

Don Juan Flores, por heridas; en 1835.

Fernina Valentin, Bernardo Velazquez, Lorenzo Zumagaza, Francisco Espino, Micaela Correa y Andrés Martinez, por escándalos; no constan sus identidades: en 1836.

Juan de la Cruz Cirilo; por hurto; no consta su identidad: en 1837.

Pedro Pablo Rosario; no consta su identidad: en 1844.

Laureano Agustin Rivera, por fuga del preso Liborio Ortiz; no consta: en 1844.

Joaquin el Habanero, José Gonzalez y Felipe Ojea, por complicidad en la muerte de Francisco Silva; no constan: en 1844.

Domingo Córdova y Teodoro Sancho, por hurto; no constan: en 1844.

Juan Pedro de la Rosa y el esclavo Lázaro, por hurto; no constan: en 1846.

Manuel Acevedo, por heridas, y su hijo, por hurto; no constan: en 1847.

Santiago Ramos, por lesiones; no consta: en 1847.

Lorenzo Mercado, Liborio Ortiz y los esclavos Juan y Venancio, por hurto; no constan: en 1848.

Don José Monserrate y José Antonio Benitez, por hurto; no constan; en 1848.

Victoriano Quiñones, por hurto; no consta: en 1852.

José Suro, por ocultacion de un expediente; no consta: en 1852.

Alejandro Pavon, por hurto, y Leopoldo Loyola, por el mismo delito; se ignoran sus identidades; en 1852.

Demetrio Guillermo, por sospechas de hurto; no constan: en 1854.

Prudencio Romero, natural y vecino de esta Ciudad, de 25 años, peon de albañil, negro, por sospechas de hurto; en 1859.

Canuto de los Santos, por hurto; no consta: en 1861.

Sandalio Marrero, estatura regular, ojos pardos, de 19 años, vecino de esta Capital; en 1861.

Domingo Marrero, vecino de esta Capital, soltero, jornalero, pardo y como de 29 años.

Don Francisco Sancho, por falsificacion de documentos simples, natural de Mallorca y vecino que fué de esta Ciudad; en 1863.

Juan José García, por quiebra; no consta su identidad: en 1864.

Don Ignacio Valdés, por hurto; no consta: en 1865.

Andrés A. Tápia, por lesiones; no consta: en 1867.

Don Gumersindo de la Helguera, por estafa, natural de Yañez, provincia de Santander, como de 28 años, sin instruccion, blanco; en 1870.

Segundo, esclavo, por hurto; no consta: en 1871.

Francisco Oulle Grana, por violacion de correspondencia y estafa; no consta: en 1872.

Ceferino Valentin, por hurto, natural y vecino de Vega-baja, de 18 años, sin instruccion; en 1873.

Gregorio Ortiz, por heridas; en 1874.

Victoriano García, por estafa; en 1875.

José Carrasquillo Candelario, de 18 años, por robo; en 1875.

Don Manuel Ortiz y Arvelo, natural de Aibonito, vecino del Dorado, soltero, jornalero, labrador, de 24 años, por lesiones; en 1875.

Juan Boscana y Salamanca, natural de Palma de Mallorca, vecino de esta Ciudad, soltero, de 35 años, zapatero, sin instruccion, por estafa; en 1876.

Don Pedro Ramos, natural de Utuado, de 28 años, labrador, pelo castaño, cejas al pelo, trigüeño, nariz regular, ojos pardos, por estafa; en 1876.

José Rodríguez Piedra (a) Pepe Piedra, viudo, de 45 años, alto, ojos negros, pelo idem, encausado por estafa; en 1876.

Martin Ramos Santos, por hurto; no consta su identidad: en 1876.

Roque Landron, por robo; no consta; en 1876.

Manuel Reyes (a) Matos, natural de Caguas, como de 40 años, sin instruccion.

Juan Dámaso Moreno, natural y vecino de Bayamon,